

# La detención de Lanusse

Un impacto noticioso, pero no una sorpresa, es la detención del teniente coronel en retiro y ex presidente de la Argentina, Alejandro Agustín Lanusse. Junto con él fueron detenidos los ex comandantes en jefe de la Marina y la Aviación, también retirados, que integraron con Lanusse la junta militar que gobernó a ese país entre 1971 y 1973, y el ministro de Defensa de la época Jorge Rafael Cáceres Monie. Al momento de escribir estas líneas todos estaban incomunicados en la alcaldía del Palacio de Justicia y a disposición del juez federal Eduardo Francisco Marquard.

Las razones oficiales de la detención son las presuntas irregularidades en la concesión que se otorgó a la empresa ALUAR, Aluminios Argentinos, para que montara, precisamente, la planta que fabrica aluminio y que lleva ese nombre. Ello ocurrió cuando cada uno de los detenidos ocupaba los altos cargos que ya hemos mencionado. La concesión otorgada a ALUAR fue criticada y cuestionada ya en el gobierno peronista, porque se estimaba que se le habían dado a dicha empresa ventajas excesivas. Pero aun cuando en el Parlamento se formó una comisión investigadora, ésta no llegó a resolución alguna y de sus planteamientos fluía la recomendación de nacionalizar la fábrica.

Puesto que hay un antecedente, en apariencia la detención de estos personajes obedece a una gestión judicial emprendida por un régimen supuestamente empeñado en una tarea de saneamiento de las prácticas económicas. Sólo que se trata de algo muy diferente. Nunca se había dado el caso en la Argentina de que una junta militar juzgara a los componentes de otra anterior por ningún tipo de razones, y menos aún por los negocios en que pudieran haber estado implicada. Y cabe hacer notar que no se ha dicho que alguno de los acusados recibiera alguna prebenda por otorgar una concesión en las condiciones que se cuestionan.

Por lo tanto, queda descartado que el objetivo pudiera ser el saneamiento de las prácticas económicas, eso no es más que la hojarasca que recubre las motivaciones de orden político que existen tras la detención. El asunto es bastante claro y radica en la pugna que existe en las fuerzas armadas argentinas, donde se distinguen dos sectores: uno relativamente moderado que es el que encabeza el general Jorge Rafael Videla, actual presidente del gobierno militar, y el ultra derechista que quiere instaurar un régimen más duro y represivo que el actual y que está representado por el ministro de Planeamiento, general Jorge Díaz Bessone.

Esta pugna existe desde que los militares asumieron el poder el 24 de marzo del año pasado y ha sido fácil seguirla a través de las declaraciones de Videla que habla de una apertura política, de un diálogo con todos los sectores para instaurar una nueva democracia que no define con claridad y las contradicciones que siguen a esos pronunciamientos por parte de otros militares con cargos de gobierno que se apresuran a señalar que tal apertura y diálogo no tienen fecha o simplemente no están en carpeta.

En medio de esta situación, Lanusse se perfilaba como el hombre que podría encarnar una fórmula de recambio. Esto tampoco era casual, el ex presidente había manejado de hecho los acontecimientos argentinos desde mucho antes que asumiera la Presidencia de la República y era su influencia en los institutos armados argentinos la que decidía el cambio de los gobiernos militares que lo antecedieron. Su decisión de encabezar la junta que gobernó de 1971 a 1973 se debió a que la situación política, social y económica de la Argentina había llegado ya a un punto crítico. Los regímenes uniformados no habían solucionado ninguno de los problemas del país, sino que por el contrario los habían agudizado.

Lanusse, inteligente y con criterio más amplio, entendió que por ese camino su país no sólo iba a llegar a estallidos internos serios, sino que seguiría perdiendo importancia en el plano internacional y especialmente en el latinoamericano. De ahí que como Presidente desarrollara una acción para sacarlo del aislamiento en que se encontraba. Lo integró al Grupo de los 77, aceptó el pluralismo ideológico en su relación con los demás países y le devolvió el poder a los civiles por dos razones. La primera de ellas, porque los militares no tenían ya soluciones que ofrecer y sólo podían seguir desgastándose en el ejercicio del poder. La segunda, porque intuyó que no podía seguir luchando contra el peronismo en la forma en que lo había hecho hasta ese momento, sino que tenía que darle a éste la posibilidad de demostrar qué era exactamente.

Y esa fue una prueba decisiva, porque desencadenó las contradicciones encerradas en el peronismo, al mismo tiempo que se producía una clarificación ideológica en Argentina, en la cual las distintas fuerzas asumieron sus propias posiciones, diluidas hasta ese entonces en el conjunto heterogéneo que era el peronismo. Ese proceso fue seguido con atención por Lanusse, quien estimaba que llegaría un momento en que volvería a tener su oportunidad para alcanzar nuevamente al poder, pero legitimado por una restauración democrática aunque fuera de características limitadas.

Los planteamientos de Videla acerca del establecimiento de una nueva democracia coadyuvaban a los propósitos de Lanusse, fuera o no esa su intención. Entonces estalló con carácter de escándalo lo que ya se conoce como el "caso Graiver" que involucró a personas allegadas a Lanusse, acusados todos de financiar a los Montoneros en forma indirecta al recibir en depósito los millones de dólares que éstos obtuvieron como rescate por el secuestro de ejecutivos de importantes empresas y pagar por ese dinero intereses que los Montoneros destinaban al financiamiento de sus actividades.

Desde un comienzo se trató, por parte de los duros de las fuerzas armadas argentinas, de vincular a Lanusse a este caso y como consecuencia de ello fue secuestrado y aún está desaparecido el que fuera su secretario de prensa Edgardo Sajón. Pero las mismas pugnas internas hacían difícil establecer ese vínculo, por eso es que ahora lo han hecho a través de una vía indirecta que se ampara en un proceso judicial por las ventajas concedidas a ALUAR. Y se eligió esa empresa porque el 95 por ciento de sus acciones pertenecen a la firma Fate S.A., que fabrica neumáticos, y de la cual el principal accionista es el ex ministro de Economía José B. Gelbard, relacionado con el grupo Graiver.

De esta manera se completa la operación para incluir a Lanusse en el escándalo financiero, ya que no fue por casualidad que el juez que decretó su detención consultara al Ejército sobre la relación que ALUAR tenía con el caso Graiver. Las cosas han llegado adonde tenían que llegar, porque es indudable que el escándalo en torno al grupo Graiver se hizo estallar con la finalidad precisa de afectar a Lanusse y sus posibilidades de constituir la alternativa política al actual régimen argentino. Si ese sector financiero no hubiera estado ligado a dinero de los Montoneros ni se habría realizado una investigación tan minuciosa como la que ha tenido lugar. El asunto ha llegado ya a su punto culminante con la detención e incomunicación de Lanusse, y ahora comienza la fase decisiva de la pugna militar.